

Marco NEGRÓN

CARACAS EN BUSCA DE LA GOBERNABILIDAD

Cualquiera podría pensar que exagera quien diga que Caracas es una ciudad desafortunada: emplazada en un lugar de excepcional belleza, con condiciones climatológicas especialmente benignas y una localización estratégica que fácilmente le permitiría cumplir el relevante rol de puerta de entrada de América del Sur, sobre ella parecerían converger todas las condiciones para ser un centro urbano de notable calidad. Si se piensa además que es la capital de un país reducido en población y que desde hace ochenta años disfruta de la ventaja de ser uno de los principales exportadores de petróleo del mundo, secluirá que habría que ser un verdadero genio de la chapuza para malograr tan favorables oportunidades.

Pero lo que parecía imposible ha terminado por ocurrir: después de un período de esplendor en el que, entre otras cosas, consolidó un enviable patrimonio moderno que le permitió superar el *handicap* de carecer de un patrimonio arquitectónico colonial o siquiera decimonónico relevante, la ciudad ha entrado en un período de degradación difícil de imaginar: la notable infraestructura construida entre los años 40 y 60 del siglo pasado hace tiempo que se hizo insuficiente o está obsoleta, algunos servicios registran un auténtico colapso y casi la mitad de la población se ha visto en la necesidad de resolver por su cuenta, en las llamadas áreas informales, la habilitación urbanística y la construcción de las viviendas que le permitieron ubicarse en la ciudad; el tráfico, pese al importante alivio que ha significado el Metro, se ha convertido en una auténtica pesadilla para todos sus habitantes, al tiempo que los espacios públicos abiertos han sido copados por una masa anarquizada de comerciantes informales. Pero lo más grave, aunque quizás lo menos percibido, es que esa dinámica ha ido conduciendo a una acentuación de la escisión social de la ciudad: quienes pueden se retiran hacia urbanizaciones y condominios de acceso controlado, creando simultáneamente sus propios espacios públicos cerrados —clubes y centros comerciales y de recreación—, de modo que la calidad más relevante de la ciudad, su condición de espacio del intercambio y la integración socio-cultural, se ha erosionado considerablemente. Resulta ya muy claro que ella se va conformando alrededor de dos polos sociales contrapuestos entre los cuales hay cada vez menos comunicación.

9

La respuesta tradicional de las autoridades ha sido la de que se trata de una ciudad ingobernable y para sustentar su tesis han llegado hasta a falsificar las cifras de población, atribuyéndole un número de habitantes que a veces más que duplicaba la realidad. Pero ocurre además que el crecimiento demográfico del Área Metropolitana de Caracas, que en verdad había sido excepcionalmente alto desde que en la década de 1920 inició su transición demográfica, comienza a declinar de manera significativa a partir de los 70, al punto que entre 1981 y 1990 la población apenas se incrementó en un 3,98%, con una tasa anual promedio del 0,43%, bastante inferior a la nacional, que, aunque también

declinante, aún se mantuvo en el 2,60%; fue Caracas la que por mucho, entre las 26 ciudades venezolanas más grandes, registró un menor crecimiento en ese período, situación que por lo demás ya se había registrado, aunque menos dramáticamente, entre 1971 y 1981.

LA BÚSQUEDA DE LA GOBERNABILIDAD

Para los expertos y estudiosos de la materia aquella respuesta se entendió siempre como una simple coartada: más que ingobernable, Caracas se había convertido en una ciudad desgobernada y no por razones meramente coyunturales, como podría ser la incompetencia de un gobernante eventual, sino estructurales, por la obsolescencia e inadecuación de sus instituciones de gobierno y por la evidente incapacidad para sustituir el agotado modelo de financiamiento que apuntaló la fase de expansión, centrado en una supuestamente ilimitada capacidad del estado nacional para redistribuir petrodólares.

Es así que desde que los modernos proyectos de reforma del estado comenzaron a tomar cuerpo, particularmente en el seno de la desaparecida Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), el tema de la gobernabilidad de la capital de la República concentró un muy alto interés. Este se vio reforzado con el nacimiento de la antigua Fundación, hoy Asociación Plan Estratégico Caracas Metropolitana, que abrió un amplio debate orientado a generar una visión compartida de la capital, a partir de la cual formular los lineamientos estratégicos de su transformación. De ese debate se concluyó que el déficit de gobernabilidad que ella registraba era la variable clave, cuya resolución era una suerte de condición *sine qua non* para poder abordar con éxito los demás retos que se planteaban.

La instalación de la Asamblea Constituyente en 1999 pareció abrir la posibilidad de lograr un avance sustantivo en la materia, por lo que un equipo de especialistas organizados alrededor de la Fundación Plan Estratégico intentó aprovechar la coyuntura para que la nueva Constitución de la República incluyera los elementos esenciales para propiciar la reforma de las instituciones de gobierno no sólo de la capital, sino de todas las áreas metropolitanas del país. Ese intento y sus resultados es lo que analizan los artículos que conforman esta edición de la revista *Urbana*.

¿UNA CIUDAD AÚN MÁS INGOBERNABLE?

Más allá de esa circunstancia en sí misma tan importante, que pese a sus ambigüedades y carencias culminó por fin en la creación de los órganos metropolitanos de gobierno, la situación de la ciudad —lo

que ahora, por la precisión, lleva el feo nombre de Distrito Metropolitano de Caracas— ha terminado por agravarse: la visión integral de la ciudad sigue ausente, trabajando cada municipio como si no estuviesen insertos en un conjunto urbano más amplio, pero, para empeorar las cosas y alimentado por las citadas ambigüedades y carencias del instrumento legal, se ha desatado además un enfrentamiento entre la recién creada Alcaldía Metropolitana, la institución supuestamente destinada a posibilitar esa visión integral, y las alcaldías municipales, con el previsible resultado de la parálisis y la indefinición de las políticas hacia la ciudad.

Como resultado de los artículos incluidos en esta edición de *Urbana*, la Ley aprobada por la Asamblea Constituyente adolece en efecto de fallas gravísimas que sólo podían ser superadas con la buena voluntad y el espíritu de cooperación de todas las instancias del gobierno local, metropolitanas y municipales. Lamentablemente ha ocurrido lo contrario, y lo que está por detrás no son, evidentemente, diferencias de visión acerca de la ciudad y su gobierno —¡sería un verdadero lujo!— sino los intereses políticos más mezquinos e inmediatos. Se ha comprendido, sin duda, que la Alcaldía Metropolitana constituye una excelente plataforma para aspirar a la Presidencia de la República, por lo que si de una parte predomina un cierto gusto por las actuaciones efectistas, de otras prevalece algo todavía peor: los esfuerzos dirigidos a hacer fracasar esa gestión.

Esto último se ha evidenciado claramente en el reciente debate acerca de la conveniencia o no de subdividir en varios municipios al Distrito Capital, hasta ahora coincidente con el municipio Libertador, el más extenso y poblado del Distrito Metropolitano: entre las iniciativas presentadas era evidente que algunas carecían de otra sustentación que no fuera el debilitamiento de esa instancia. Pero hay más señales al respecto —algunas aún más graves, como el tratamiento presupuestario que se le ha dado al gobierno metropolitano— que carece de sentido reseñar ahora. Sólo interesa destacar que, aún aceptando que la persona que circunstancialmente ejerce el cargo se hubiera convertido en una molestia para otras instancias de gobierno, manejar el problema de esa manera —que se puede resumir en la traijinada metáfora de botar al niño con el agua sucia— únicamente revela primitivismo político y ausencia absoluta de visión de largo plazo, la única que puede darle sentido a la acción sobre la ciudad.

UNA CIUDAD EN DECADENCIA

En todo caso, lo único que resulta incontrovertible es que Caracas se encuentra hoy en un proceso de decadencia acelerada: sus autoridades no han sido capaces de responder a las necesidades de reconversión

planteadas por el cambio en los escenarios económicos (agotamiento del dinamismo petrolero, globalización y terciarización), de modo que se trata de responder a fenómenos como el crecimiento desaforado del comercio ambulante simplemente creándole recintos para evitar que ocupen las calles. Pareciera no entenderse que el único objetivo sensato a perseguir debe ser el de acabar con la buhonería, al menos en sus proporciones actuales, a través de un cambio radical en la base económica de la ciudad. Cambio que exige contar con una visión integral y de largo plazo por parte de los gobiernos locales, donde el elemento central debe ser la progresiva búsqueda de la independencia presupuestaria del gobierno nacional y la exploración de nuevas formas de cooperación con la inversión privada, nacional e internacional. Ello sin embargo requiere de un fuerte cambio en la mentalidad de nuestros gobernantes, en su manera de entender la construcción de la ciudad y la importancia que ella tiene en la activación de la economía nacional. Esa mentalidad, sin embargo, ha sido moldeada por nuestra secular dependencia de la renta petrolera, de modo que lo recomendable en la materia es mantener un cauto pesimismo.